

Reproducido en www.relats.org

AGRONEGOCIOS EN BRASIL

1.Protomotores del veneno

2.Una bancada bien sentada

Enildo Iglesias

Publicados en la web de REL-UITA,

junio y agosto 2018

Estas notas pueden leerse en el contexto del complejo panorama brasileño de abusos de las empresas de agronegocios con sus trabajadores, en ocasiones en el borde de trabajo forzoso

I.Promotores del veneno

En el parlamento brasileño se está debatiendo el proyecto de ley 6.299/2002, conocido como “paquete del agrotóxico” o “paquete del veneno”. Azucareras, frigoríficos, papeleras, bancos y otras grandes empresas apoyan económicamente a algunos corruptos integrantes de la llamada bancada ruralista, que impulsa el criminal proyecto.

Además de permitir el uso de agrotóxicos prohibidos en otros países, Brasil es líder mundial en su utilización.

Entre 2006 y 2016 el mercado global de agrotóxicos creció 93 por ciento mientras en **Brasil** el crecimiento fue de 190 por ciento, **al punto que en 2015 se aplicaron 900 mil toneladas de agrotóxicos en la agricultura brasileña.**

En **Brasil** los agrotóxicos están exonerados de algunos impuestos, lo que permite el absurdo de que mientras los impuestos representan el 34 por ciento del precio final de los medicamentos, en los agrotóxicos llegan sólo al 22.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente ocurren 25 millones de casos de envenenamiento por agrotóxicos, que provocan 20 mil muertes.

En **Brasil**, en el período 2007/2017 fueron más de 107 mil los casos de intoxicación, con 3.452 muertes, números estos últimos que son aproximados, pues es sabido que muchos envenenamientos no son registrados.

Para las grandes compañías de la industria química y los latifundistas la situación no es alarmante y los privilegios que reciben no son suficientes.

Por ello es que están movilizándolo a los diputados de la bancada ruralista –llamada peyorativamente “*bancada do boi*”– para que promuevan una serie de proyectos de ley bautizados por la sociedad civil como “**Paquete del Veneno**”.

La bancada ruralista está integrada por 207 de los 513 diputados que conforman la Cámara.

Si a estos legisladores no les importa la salud de los trabajadores y trabajadoras y de los consumidores, mucho

menos les debe importar que el “**Paquete del Veneno**” viole tratados internacionales ratificados por **Brasil**, especialmente los convenios 155 y 170 de la **OIT**, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, y sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, respectivamente.

Perjuicios del proyecto

A continuación, algunos de los problemas que presenta el mencionado proyecto:

-Cambia la denominación “agrotóxico” por “*defensivo fitosanitario*” y “*productos de control ambiental*”, pretendiendo esconder el verdadero riesgo de estos productos.

Guillermo Franco Netto, de **Fiocruz**¹, recuerda que según la etimología de las palabras, agrotóxico proviene de la conjunción de agro, que significa terreno cultivable, y de tóxicos que significa veneno; mientras fitosanitarios proviene de fito=planta y sanitario=salud.

-Autoriza cualquier producto por el simple hecho que haya sido aprobado en al menos tres países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (**OCDE**).

-Los productos considerados peligrosos por algún órgano internacional encargado de la salud, la alimentación y/o el medio ambiente de los cuales **Brasil** sea miembro o signatario de algún tratado o convenio, **no serán retirados de la circulación y venta y apenas se realizará un “reanálisis” de los riesgos.**

-Los reanálisis de los productos “fitosanitarios y afines” serán concluidos en el plazo de un año, prorrogable por seis meses.

Hasta entonces persiste la posibilidad de comercialización, producción, importación y uso del producto.

–Se autoriza la producción y comercialización de agrotóxicos con “riesgo aceptable” y la prohibición a la importación y producción de agrotóxicos se restringen a los “riesgos inaceptables”.

En ninguna parte del proyecto se define, sin embargo, cuáles son los “riesgos aceptables”.

Los agrotóxicos podrán ser liberados sólo por el **Ministerio de Salud**, dejando de lado la participación actual de otros organismos, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (**Ibama**) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (**Anvisa**), quitándole transparencia al análisis.

-Por lo que veremos más adelante, presumo que la reducción propuesta se encuentra dentro de los programas de rentabilidad de las empresas: resulta más económico sobornar a un organismo público que a tres.

No hay cena gratis

Empresarios y legisladores mancomunados

Es evidente que existe una relación entre las donaciones para las campañas de los integrantes de la bancada ruralista y sus propuestas de reglas más flojas para los agrotóxicos.

Según Cida de Oliveira ^{II}, productores de caña de azúcar, eucalipto, tabaco, amianto, fábricas de todos los tamaños, industrias químicas, de alimentos, celulosa y de armas, ganaderos, bancos y seguros de salud, están entre los mayores financiadores de las campañas de los diputados que defienden la aprobación del “paquete del veneno”.

Se trata de sectores que dependen de los agrotóxicos en sus sistemas de producción, que los fabrican, que los venden o que pretenden ampliar la participación en el agronegocio como un todo.

Oliveira menciona los nombres de los diputados y las cantidades de dinero que recibieron para sus campañas políticas. **Entre las empresas “donantes” figuran algunas conocidas:**

–**Raízen**, la mayor productora de azúcar y etanol del país, que abastece de este combustible a todas las estaciones de **Shell**. Ha sido condenada por el Ministerio Público del Trabajo (**MTP**) debido a que sus trabajadores en los cañaverales estaban expuestos a los agrotóxicos sin protección adecuada.

–**Braskem**, la mayor petroquímica de **América Latina**, entre otros productos elabora el llamado “plástico verde” obtenido de la caña de azúcar, cultivo que es el segundo mayor consumidor de agrotóxicos de **Brasil** (la soja ocupa el primer lugar).

–**Fibria**, la mayor productora mundial de celulosa de eucalipto.

–**JBS** y **BRF**; ambas transnacionales de la industria de la carne aparecen como contribuyentes de numerosos diputados.

–**Nufarm**, transnacional australiana que figura entre los 10 mayores productores y proveedores mundiales de agrotóxicos, entre ellos el 2,4-D.

–**Mitsui**, conglomerado japonés que entre otros productos produce agrotóxicos. Está asociado con la alemana **Basf** para desarrollar una nueva molécula, la broflanilide, para ser usada como insecticida.

–**Itaú y Bradesco** encabezan la lista de bancos que aparecen como donantes de la bancada ruralista.

–**Philip Morris y China Brasil Tabacos**. Ambas tabacaleras han sido acusadas de contar entre sus abastecedores a plantadores que explotan mano de obra análoga a la esclavitud y de exponer a sus trabajadores a los agrotóxicos al brindarles apenas gorros, bermudas y chinelas como elementos de protección.

–**Eternit**, filial de la transnacional belga **Etex**, elabora tejas y cajas de agua a partir del amianto.

–**Taurus**, fabricante de pistolas, revólveres y armas largas también figura entre los contribuyentes.

Se han manifestado contra el “paquete del veneno” algunos partidos de la oposición, el Ministerio Público Federal (**MPF**), **Ibama**, **Anvisa**, **Fiocruz**, el Instituto Nacional del Cáncer (**Inca**).

Además, un manifiesto contra la propuesta fue apoyado por 320 movimientos, redes y organizaciones sociales, entre ellas nuestra afiliada la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (**CONTAG**).

Confiamos en que logren detener la ofensiva de los promotores del veneno.

En el Brasil actual todo puede suceder, incluso que el derecho a la vida, la razón y la honradez tengan posibilidades de imponerse.

II.Una bancada bien sentada

Un nuevo capítulo El proyecto conocido como Paquete del veneno o de los agrotóxicos fue aprobado en comisión el pasado 25 de junio por 18 votos contra 9 y pasó a consideración del plenario de la Cámara de Diputados de Brasil.

Partidos de la oposición, diversas organizaciones sociales, instituciones como el Ministerio Público Federal, el Instituto del Cáncer y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se oponen fuertemente al proyecto debido a que la propuesta de flexibilizar la actual legislación –de por sí bastante deficiente– tendría como resultado, entre otras cosas, un aumento en el uso de los agrotóxicos y la liberación de algunos actualmente prohibidos en el país.

Se trata de un nuevo capítulo de una larga historia cuyo principal protagonista es la llamada Bancada Ruralista. Encajonada durante 14 años, la propuesta fue resucitada por el actual ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Blairo Maggi, el mayor productor individual de soja del mundo, responsable de cerca del 22 por ciento de la producción del grano del Estado de Mato Grosso del cual fue gobernador. Senador federal, en 2002 presentó el Proyecto de Ley 6.299/2002, actualmente reflatado.

En 2010 fue electo nuevamente senador y en mayo de 2016 asumió como ministro de Agricultura de Michel Temer, quien pasó ese año a presidir el país por el impeachment a Dilma Rousseff. En abril de 2016, en vísperas de la votación que destituyó a Rousseff y llevó a Temer a la presidencia, la Bancada Ruralista, para entonces transformada en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) junto al Instituto Pensar Agro (IPA) le entregaron al entonces vicepresidente, en una

muestra de desfachatez y oportunismo, un documento titulado Pauta Positiva – Bienio 2016/2017.

Además de reclamar para el sector la titularidad del Ministerio de Agricultura, el documento solicita, entre otras cosas, una normativa que facilite el trabajo esclavo (mal endémico en el medio rural brasileño), la flexibilización de las normas para preservación de la naturaleza y el ambiente, la venta de tierra a extranjeros, el perdón de los intereses de la millonaria deuda de los productores con el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (Fonrural) y la liberalización de los agrotóxicos. En total eran diecisiete los temas prioritarios para los ruralistas, de los cuales Temer ya los satisfizo en trece.

Un año más tarde, acosado por graves denuncias que justificaban el pedido de destitución que reclamaban algunos parlamentarios y buena parte de la ciudadanía, Temer se vio obligado a negociar su salvación con sus compinches en el Congreso. Entre otros, recurrió al FPA para evitar que la acusación de corrupción en su contra se trasladara al Supremo Tribunal Federal. Salvado de la destitución por 263 votos a 227, la mitad de los primeros aportados por el FPA, Temer continuó gobernando el país (con una tasa de aprobación que apenas supera el 3 por ciento) y en deuda con sus salvadores. Es entonces cuando reaparece el Proyecto del Ley 6.299/2002 o “Paquete del veneno”.

La mentada democracia Brasil no cuenta con una tradición democrática, pero en cambio ha mantenido a lo largo de los años la característica de poseer elites con una gran capacidad para atravesar por diferentes gobiernos sin perder nada de su poder ni privilegios.

El caso que nos ocupa no es una excepción. Buscar algún atisbo de democracia en el debate en el Congreso del

“Paquete del veneno” es perder el tiempo. De los 37 diputados que integraban la comisión especial que lo aprobó, 20 pertenecen al FPA y para que el debate resultara todavía más “democrático” se eligió como relator del proyecto a un comerciante de agrotóxicos. Se llama Luiz Nishimori y posee en Marialva (interior del Estado de Paraná), Mariagro Agricultura y Nishimori Agricultura, empresas que comercializan y prestan servicios relacionados a semillas, fertilizantes y agrotóxicos. Antes de entrar en la política fue productor de soja y dentro de los 2,5 millones de reales en donaciones que Nishimori recibió durante su última campaña electoral se destacan los aportes de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial y de la Integrada Cooperativa Industrial, ambas figuran en la lista de comerciantes de agrotóxicos.

Además del 6.299/2002, es relator de otros 15 proyectos de ley, ocho de ellos vinculados a los intereses de los ruralistas, llegando en uno a proponer limitar, en algunas circunstancias, la venta de productos orgánicos. Para completar, la vicepresidenta de la Comisión, Diputada Tereza Cristina, es a su vez presidenta del FPA.

El Proyecto de Ley pasó al plenario de Diputados donde Brasil ostenta un record mundial: de los 513 diputados que componen el cuerpo, 178 (35 por ciento) responden a acciones penales o investigaciones judiciales y de ellos, 68 (32,8 por ciento), son integrantes del FPA.

Los asuntos relacionados con el trabajo rural o con la distribución de tierras, son dos ejemplos de la casi total ausencia de políticas públicas existente en Brasil. Y en un escenario donde predomina el latifundismo – dedicado fundamentalmente a la agricultura y la ganadería destinadas a la exportación– no es casual que surjan políticos con interés

personal (o al “servicio de”) empeñados en impedir cualquier iniciativa que signifique un avance social o atente contra los intereses del agronegocio.

La historia de la economía brasileña ha sido pautada durante más de cuatro siglos por la ocupación y explotación eminentemente rural, latifundista y monocultora.

Por lo tanto, los intereses de la clase que posee la propiedad de la tierra se sobreponen a los demás intereses, aun después de ocurrida la industrialización de Brasil e incluso en el presente, puesto que el dinero del agronegocio se expandió a otros sectores de la producción nacional.

Por otro lado, con el surgimiento de grandes plantaciones de soja y algodón y la gran demanda de carne para la exportación, millares de empresas del sector urbano, incluyendo las más diversas industrias, bancos, contratistas, comerciantes, exdueños de supermercados y diversos fondos de inversión, invirtieron –y están invirtiendo– en el campo. A este conglomerado representa y cuida de sus intereses la bancada ruralista.

En este contexto, durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1987, establecida con el objetivo de elaborar una constitución democrática después de 21 años de dictadura militar, surgió la Unión Democrática Ruralista – asociación civil fundada en mayo de 1985 por grandes latifundistas– con la misión de eliminar del texto constitucional la Reforma Agraria. Aprobada la Constitución de 1988, la Bancada Ruralista se mantuvo actuante hasta 1994 y en 1995 sus diputados y senadores firmaron el acta de constitución del Frente Parlamentario de la Agricultura.

En 2005, con el fin de adecuarse a las normas de la Cámara de Diputados, fue creado el Frente Parlamentario de Apoyo a la Agropecuaria el que en 2008 pasó a su actual denominación.

Según la publicación Estadão/BroadcastIII del 29 de julio pasado, la actual representación política del agronegocio llega a 210 diputados y 26 senadores (41 por ciento del total de los diputados y 32 por ciento de los senadores) pertenecientes a 18 partidos.

No todos los diputados que son hacendados son miembros del Frente, mientras otros, sin ser ruralistas, votan con el FPA. En casos puntuales el Frente realiza alianzas, por ejemplo la celebrada con el Frente Parlamentario Evangélico para aprobar el nuevo Código Forestal y con Jair Bolsonaro, exmilitar y actual candidato presidencial, que defiende el criterio de “ni un centímetro más” para tierras indígenas y quilombolas.

Además de la ruralista, existen otras bancadas extrapartidarias. La más numerosa es la de “los parientes” (parlamentarios con familiares que ocupan u ocuparon cargos electivos) con 238 integrantes; le siguen la de empresas contratistas y de la construcción con 226; la empresarial con 208; la evangélica con 197 y la de la bala (defiende el derecho al porte de armas por la población civil y frecuentemente aparece como aliada de los ruralistas) con 35. Menos rentables económicamente, la bancada de derechos humanos cuenta con 23 integrantes y la de la salud 21.

El Frente es fuerte en algunas comisiones del Parlamento. En la de Agricultura, de sus 82 integrantes, 68 pertenecen al Frente incluyendo a su presidente; en la de Medio Ambiente, 19 de 36; en la de Constitución Justicia y Ciudadanía, 57 de 132; en la de Trabajo Administración y Servicio Público, 26 de 52 y

en la deSeguridad Social y Familia, 43 de 108. Instituto Pensar Agro Los ruralistas siempre van por más.

No conformes con haber impuesto al actual ministro de Agricultura y derrocado dos presidentes de la Funai (Fundación Nacional del Indio) siguen ejerciendo presión para que el gobierno sustituya los titulares de organismos del Estado que no contemplen sus reclamos.

La mano invisible y cabeza pensante detrás del FPA es el Instituto Pensar Agro (IPA), responsable de convertirla en la bancada mejor organizada del Congreso. Fundado en 2011, con sede en un lujoso barrio residencial del Lago Sur en Brasilia, el IPA congrega 40 organizaciones representativas del empresariado rural, las cuales además del pago de sus cuotas recaudan donaciones de diversas transnacionales (de semillas, agrotóxicos, maquinaria, etc.).

Así lo reconoció su director ejecutivo, el ingeniero agrónomo João Henrique Hummel Vieira, a la publicación A Pública. Con la misma desfachatez con la que en un sonado suceso trató de votar en una comisión de diputados sin serlo, admitió que el IPA recibe dinero de Cargill. “La compañía contribuye con las asociaciones y ellas pagan al Instituto y no tengo ninguna vergüenza de hablar de esto”, manifestó. Hummel define al IPA como “una central de inteligencia, generadora de ideas para los diputados y senadores miembros del FPA, destinadas a ‘modernizar’ la legislación sobre el trabajo rural, la tenencia de la tierra, tributaria e indigenista”.

Con un presupuesto anual cercano al millón de dólares, el IPA ofrece cuadros técnicos y políticos para asesorar a los parlamentarios del FPA, además de facilitarle logística y estructura física , así como los temas, con sus respectivos datos y argumentos, a ser discutidos en el Congreso.

En conflicto con las organizaciones ambientalistas, las defensoras de la Reforma Agraria y de los Derechos Humanos, el IPA, coincidiendo con la bancada de la bala, defiende el uso de armas en defensa de la propiedad privada contra invasiones y deja en claro que sus adversarios principales son los indios, quilombolas, sin tierra y las ONG internacionales, que en opinión de Hummel trabajan para entorpecer el agronegocio brasileño en favor de los países europeos.

Las elecciones de octubre El IPA y el FPA se esfuerzan por mejorar la imagen de sus mandantes a través de campañas como “Agro: la industriariqueza del Brasil”, que financiada con la contribución de JBS (la empresa más grande del mundo en productos de origen animal) permaneció en la TV durante dos años.

Como señalamos anteriormente, la mayor parte de la producción de los grandes terratenientes se destina a la exportación y como esta no se ve afectada por la crisis interna, las ventas de commodities en el mercado internacional siguen fuertes y les permite sumar algún punto al PIB (Producto Interno Bruto).

Con este argumento, los grandes terratenientes se presentan como los “salvadores de la patria”. Don Miguel de Unamuno aseveraba que “el hombre no es hijo de la patria, la patria es hija del hombre”.

De la misma forma muchas de las injusticias del Brasil actual son hijas de las políticas clasistas y anacrónicas que durante siglos han beneficiado a la burguesía terrateniente, que entre otras van desde no aplicar el impuesto a las grandes fortunas (Art. 153 de la Constitución Federal) al no pago de tributos sobre las exportaciones, pasando por el incumplimiento del Impuesto Territorial Rural.

Así las cosas, los beneficios de una minoría se han mantenido sacrificando los intereses de la mayoría de la población, situación que debería comenzar a cambiar en las elecciones nacionales del primer domingo de octubre.

Cuando conozcamos con cuantos integrantes cuenta la nueva Bancada Ruralista, sabremos cuantos peones votaron por sus patronos y capangas